Abstracto de Cooperación Técnica

I. Información Básica del proyecto

■ País/Región:	REG
■ Nombre de la CT:	Economía política del área de seguridad ciudadana y justicia
■ Número de CT:	
■ Jefe de Equipo/Miembros:	Jefe de equipo: Carlos Scartascini (RES). Miembros: Carina Solmirano (IFD/ICS)
 Indicar si es: Apoyo Operativo, Apoyo al Cliente, o Investigación y Difusión 	Investigación y difusión
 Referencia a la Solicitud¹: (IDBDOCS #) 	
■ Fecha del Abstracto de CT:	Junio 2014
Beneficiario (países o entidades que recibirán la asistencia técnica):	(directamente) Gobiernos de los 6 países seleccionados; (indirectamente) Gobiernos del resto de los países de la región
Agencia Ejecutora y nombre de contacto (organización o entidad responsable de la ejecución del programa de CT) (Si es el Banco: entidad contratista) (Si es la misma que el Beneficiario, favor de indicar)	Banco Interamericano de Desarrollo
■ Financiamiento Solicitado del BID:	US\$500,000
Contrapartida Local, si hay:	
Periodo de Desembolso (incluye periodo de ejecución):	24 meses
■ Fecha de Inicio Requerido:	Octubre/Noviembre 2014
Tipos de consultores (firmas o consultores individuales):	Individuales
Unidad de Preparación:	RES
Unidad Responsable de Desembolso (UDR):	RES
 CT incluida en la Estrategia de País (s/n): CT incluida en CPD (s/n): 	
■ Prioridad Sectorial GCI-9:	Seguridad Ciudadana

II. Objetivos y Justificación de la CT.

Mientras las tasas de violencia, delincuencia e inseguridad aumentan en América Latina y el Caribe, los gobiernos de la región han intentado dar respuesta a las demandas de la ciudadanía con aumentos en las partidas presupuestarias del gasto asignado al sector de seguridad. En Centroamérica y México, solamente, el gasto de los ministerios de seguridad aumentó un 131% entre 2006 y 2012.² México se destaca con un aumento del 239 % en términos reales, seguido

¹ Una copia de la Carta de Solicitud, ayuda memoria de la misión o reunión de Programación/Revisión de Cartera, o Informe solicitando la CT deberá ser presentada con el Abstracto de CT.

² Solmirano, Carina. 'Security Spending and violent organized crime in Central America', *SIPRI Yearbook 2013* (Oxford: OUP, 2013), p. 150.

por Costa Rica (124%) y Panamá (72%).³ No sólo se observa una mayor actividad en el área en términos de gasto pero también por la implementación de nuevas políticas públicas que ayuden a controlar este flagelo. En ese sentido, han habido cambios de legislación (como son las mayores penas por delitos), de organización (como es la creación de ministerios o agencias especiales de seguridad), y de política de prevención y control (como es la reubicación de la policía dentro de los distritos, la incorporación de cámaras de seguridad y tecnología, etc.).

La evidencia hasta ahora muestra que los aumentos de gasto no han sido uniformes ni necesariamente correlacionados con la magnitud del problema, que la respuesta en términos del diseño de política también ha sido dispar, que ciertas políticas que parecerían tener consenso en la comunidad académica respecto a su eficiencia y eficacia no siempre son implementadas. El hecho de que los aumentos en el gasto y las nuevas políticas no siempre hayan sido acompañados por mejoras en los indicadores de seguridad, abre varias preguntas: ¿Son los niveles de gasto en seguridad adecuados a la realidad de inseguridad y violencia que vive la región? Y si no lo son, ¿por qué no se invierte lo suficiente en esta área? ¿Cuál es la prioridad del gasto en seguridad (ampliamente definido) dentro de la agenda presupuestaria? ¿Es la asignación del gasto adecuada (eficiencia)? ¿Cuáles son los mecanismos de asignación de gasto?, ¿Cuál es la eficacia de las políticas implementadas? ¿Cómo se decide la organización del área? ¿Quiénes participan del diseño de políticas? ¿Qué incentivos existen para mejorar la seguridad ciudadana? ¿Qué incentivos existen para la planeación de políticas de largo plazo en lugar de parches de corto plazo? ¿Cuál es el grado de coordinación de las distintas agencias y entidades de gobierno que tienen injerencia en actividades destinadas a mejorar la seguridad ciudadana?

El conocimiento existente en estas áreas para la región es todavía relativamente escaso. Por un lado, varios estudios han analizado los procesos de asignación presupuestaria en América Latina⁴, pero solo unos pocos lo han hecho para el sector de seguridad. La información sobre el sector de seguridad al igual que el sector de defensa ha sido tradicionalmente muy opaca, ya que se ha amparado en una cultura de secreto o confidencialidad, aun cuando ambos sectores deberían ser sujetos a los mismos principios de gestión financiera pública que el resto del sector público⁶. De manera similar, hay evidencia sobre como se deciden el marco de políticas públicas en los países de la región pero hay escaso conocimiento sobre la manera en que se deciden sobre los diferentes modelos de seguridad y justicia, ya sean modelos de policía, de justicia penal o de gestión carcelaria. Mas aun, cómo se decide entre distintas maneras de afrontar el problema y buscar soluciones.

³ Este gasto es solamente a nivel agregado para el sector de seguridad pública (sin desagregar seguridad ciudadana).

⁴ Hallerberg, Scartascini, y Stein (2010) ¿Quienes deciden el presupuesto? Un análisis de economía política del proceso presupuestario en América Latina. BID y Mayol.

⁵ Ver The World Bank, *El Salvador Security and Justice Public Expenditure and Institutional Review*, June 14, 2012 y Carrion, F. y Dammert, M., (op. cit), en particular los casos de Colombia, Chile, Perú y México.

⁶ The World Bank, *Poverty Reduction and Economic Management Network, Public Expenditure Management Handbook* (World Bank: Washington, DC, 1998), URL http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/handbooks.htm, pp. 1–2.

⁷ Scartascini, Spiller, Stein, y Tommasi (2011). El juego político en América Latina. ¿Cómo se deciden las políticas públicas? BID y Mayol.

⁸ Por ejemplo, la decisión de invertir en la gestión de cárceles, priorizar la formación de policías comunitarias o sistemas de justicia centralizados/descentralizados, o la decisión de invertir en prevención o control, o de invertir directamente en áreas de policía o de política social.

El **objetivo** de este proyecto es generar conocimiento que contribuya a entender el proceso de diseño e implementación de políticas en el área de seguridad ciudadana incluyendo las decisiones de asignación de recursos presupuestarios y extra-presupuestarios a los distintos sectores involucrados. Este conocimiento debería contribuir en el largo plazo a una mejor gestión de las políticas de seguridad ciudadana de los gobiernos de LAC, enriquecer el conocimiento que ya se está generando en el sector de seguridad ciudadana y justicia en el BID, y darle valor agregado a los proyectos del clúster actualmente en curso. Conociendo quienes son los actores que participan del proceso de decisiones, cuáles son sus incentivos, cuál es el proceso de coordinación será posible brindar un mejor apoyo a los gobiernos que lo soliciten.

Esta CT está alineada con las prioridades sectoriales GCI-9 del Banco, en particular con el sector de seguridad ciudadana y su pilar de gestión y evaluación.

III. Actividades

Componente 1. Desarrollo de un marco conceptual para el análisis del diseño de políticas en el sector: Este componente financiará la realización de sesiones de brainstorming y la contratación de uno o más expertos que serán responsable(s) por desarrollar el marco conceptual y la metodología para la realización de los casos de estudio tomando en cuenta los objetivos de este proyecto. En esta etapa se definirá la metodología, se identificarán referencias relevantes, y se conceptualizaran los indicadores de medición necesarios, tanto para entender el funcionamiento del proceso de decisiones de política así como el análisis de los recursos presupuestarios y extra-presupuestarios destinados al sector de seguridad y justicia.

Componente 2. Formación de una red de expertos: Este componente financiará los estudios de caso para 6 países seleccionados. Estos estudios de casos serán llevados adelante por expertos multidisciplinarios (economistas, cientistas políticos y expertos en crimen y justicia). Se buscará que estos expertos, trabajando con el equipo conformado por un o más coordinadores externos y el equipo interno, se reúnan en distintas etapas del proceso para discutir el progreso de los casos e intercambiar experiencias. Este componente financiará también dichas reuniones.

Componente 3. Diseminación de resultados: Al final de este proyecto, se prevén varias actividades de diseminación, tales como: la publicación de los documentos de trabajo; artículos para el blog Sin Miedos; la presentación de los resultados en foros, seminarios, y conferencias, y; una posible edición y publicación de un compendio con los resultados de las investigaciones realizadas.

IV. Presupuesto indicativo

Actividad/Componente	Descripción	BID/Financiami ento por Fondo	Contrapar tida Local
Componente 1: Desarrollo de un marco de análisis	Reunión de brainstorming para identificar potenciales coordinadores y expertos externos, y definir el alcance de la metodología y temas de estudio.	US\$ 20,000	

	Realización del estudio preliminar para definir la metodología de trabajo.	US\$20,000	
Componente 2: Creación de red de expertos	Realización de estudios de caso (6 equipos de trabajo a US\$50,000 cada uno) Seguimiento y coordinación de los equipos de	US\$300,000	
	trabajo Gastos de organización de reuniones de los	US\$20,000	
	equipos de trabajo en diferentes etapas de los estudios (inicio, medio, final)	US\$30,000	
	Reuniones de cada equipo de trabajo	US\$70,000	
Componente 3: Diseminación de resultados	Reuniones de expertos y gobiernos para la presentación de los estudios	US\$15,000	
	Edición y publicación de compendio/libro sobre gasto en seguridad ciudadana y justicia (incluyendo el marco conceptual, metodología, y estudios de caso)	US\$25,000	

- V. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución: El proyecto será ejecutado por el BID, bajo la responsabilidad de RES.
- VI. Riesgos importantes: Existe un riesgo de que no se pueda contratar a un experto con la experiencia necesaria para diseñar el marco conceptual y la metodología para los equipos de trabajo. Para mitigar este riesgo, RES usara su red de contactos y publicará extensamente los términos de referencia. Existe un riesgo de que los datos presupuestales de las distintas entidades involucradas en seguridad ciudadana no estén disponibles. Para mitigar este riesgo, los equipos conducirán entrevistas con las distintas direcciones o subdirecciones presupuestales de los ministerios involucrados para asegurar que el levantamiento de esos datos sea posible con la mayor precisión posible
- VII. Salvaguardias ambientales: No existen impactos ambientales para este proyecto.